



Las elecciones presidenciales en Perú entraron en una fase de alta tensión política y diplomática luego de que el exmilitar y dirigente etnocacerista Antauro Humala Tasso confirmara su alianza con el sector del candidato Roberto Sánchez y planteara una ofensiva para "recuperar Tarapacá y Arica" en un eventual gobierno de esa coalición. Sus declaraciones, realizadas en entrevista con Perú21, instalaron un nuevo foco de controversia en medio de un proceso electoral aún marcado por el lento conteo de votos y la incertidumbre sobre quién disputará finalmente el balotaje frente a Keiko Fujimori.

El episodio no es menor para Chile, especialmente para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, territorios que vuelven a ser mencionados en un discurso nacionalista peruano con una carga histórica evidente. Humala afirmó que, como nacionalista, aspira a revisar "al pie de la letra" el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929, además de mantener el litigio por el denominado triángulo terrestre. En la misma entrevista, fue más allá al sostener que Perú debería reivindicar Tarapacá y Arica "por la vía diplomática o por la vía armada".

Las palabras del líder del Frente Patriótico Peruano y del movimiento etnocacerista generaron inmediato impacto porque no se producen en un escenario marginal, sino en medio de un proceso de reordenamiento electoral en Perú. Según reportes internacionales, la elección del 12 de abril dejó a Keiko Fujimori en primer lugar, mientras Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga mantenían una estrecha disputa por el paso a segunda vuelta, con un conteo lento y cuestionamientos desde algunos sectores políticos. Reuters informó que,

con el escrutinio avanzado, Fujimori lideraba con cerca del 17%, seguida por Sánchez con alrededor del 12% y López Aliaga con cerca del 11,9%.

En ese contexto, las alianzas para la segunda vuelta comenzaron a adquirir un peso decisivo. Humala confirmó que su organización decidió respaldar a Roberto Sánchez luego de quedar fuera de la competencia electoral, asegurando que existía convergencia programática con el candidato de Juntos por el Perú. En sus palabras, su sector habría contribuido de manera relevante al resultado obtenido por Sánchez, junto con lo que denominó el "castillismo", en referencia al bloque asociado al ex-presidente Pedro Castillo.

El problema político para Sánchez es evidente. Antes de las elecciones, el candidato había señalado que en un eventual gobierno la lucha contra el crimen estaría en manos de Antauro Humala, sin embargo, tras los comicios tomó distancia de algunas de sus propuestas, afirmando que correspondían a ideas personales del exmilitar y no necesariamente al programa de Juntos por el Perú, según recogieron medios peruanos. Esa aclaración, aunque busca reducir el costo político, no elimina la tensión que provoca la presencia de Humala en el entorno de apoyos del candidato.

Desde una mirada crítica, el punto central no es solo la frase, sino el uso político de una reivindicación territorial que toca fibras sensibles en la historia bilateral entre Chile y Perú. La apelación a Tarapacá y Arica no es nueva en ciertos sectores ultranacionalistas peruanos, pero adquiere otra dimensión cuando aparece en el marco de una negociación electoral y

asociada a una eventual responsabilidad de gobierno. En política exterior, las palabras importan. Y cuando se habla de tratados, límites y vías armadas, el debate deja de ser retórico para transformarse en un factor de riesgo institucional.

Humala es una figura polémica en Perú. Exmilitar, hermano del ex-presidente Ollanta Humala y líder de una corriente etnocacerista de carácter nacionalista, indigenista y militarista, ha construido parte de su discurso sobre la reivindicación de un proyecto de "neo-Tahuantinsuyo" y una crítica frontal al orden político peruano tradicional. Su eventual cercanía a un proyecto presidencial no solo tensiona la política interna del vecino país, sino que también obliga a observar con atención el tipo de señales que podrían proyectarse hacia Chile.

Para las regiones del norte chileno, el debate tiene una dimensión concreta. Tarapacá y Arica no son solo referencias históricas ni conceptos abstractos en una controversia diplomática. Son territorios vivos, con comunidades, actividad económica, integración fronteriza, vínculos familiares, comercio, migración, seguridad y cooperación cotidiana con el sur peruano. Por eso, cualquier discurso que plantee una revisión territorial bajo términos de confrontación resulta particularmente delicado.

La estabilidad de la relación entre Chile y Perú ha sido construida durante décadas sobre tratados, mecanismos diplomáticos, comercio, integración fronteriza y cooperación regional, incluso en medio de diferencias históricas. Por lo mismo, declaraciones como las de Humala ponen presión sobre una relación bilateral que, aunque ha atravesado

controversias, requiere responsabilidad política y diplomática para evitar que el nacionalismo electoral contamine agendas de cooperación necesarias.

En Chile, parlamentarios y actores políticos reaccionaron con rechazo a las declaraciones del dirigente peruano, calificándolas como irresponsables y fuera de toda lógica diplomática. Medios nacionales recogieron críticas desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, donde se advirtió sobre la gravedad de plantear escenarios de reivindicación territorial mediante una eventual vía armada.

El episodio ocurre, además, en un Perú marcado por una profunda fragmentación electoral. El proceso presidencial de abril estuvo cruzado por un alto número de candidaturas, baja adhesión ciudadana y un importante volumen de votos blancos, nulos y abstención, expresión de una crisis de representación que sigue golpeando al sistema político peruano. El País reportó que ningún candidato alcanzó el 20% de los votos válidos en primera vuelta y que la apatía electoral fue uno de los elementos más relevantes del proceso.

Ese escenario ayuda a entender por qué discursos duros, identitarios o nacionalistas pueden ganar espacio en momentos de debilidad institucional. Cuando los sistemas políticos pierden capacidad de representación, ciertos liderazgos buscan capitalizar el descontento mediante mensajes de confrontación, apelando a la memoria histórica, al resentimiento social o a la promesa de recuperar una supuesta grandeza nacional. El riesgo es que esa retórica termine desplazando los debates urgentes

sobre seguridad, economía, gobernabilidad y cooperación regional.

La responsabilidad principal, en este caso, recae sobre quienes aspiran a gobernar. Roberto Sánchez deberá definir con claridad si su proyecto político incorpora o rechaza de manera categórica este tipo de planteamientos. No basta con señalar que se trata de ideas personales de un aliado si ese aliado es presentado como parte de una coalición o como eventual actor en áreas sensibles del Estado. En política exterior, la ambigüedad puede resultar costosa.

Para Chile, la respuesta debe combinar firmeza institucional y prudencia diplomática. La defensa de la soberanía y de los tratados vigentes no requiere caer en provocaciones ni escalar una polémica que, en buena parte, parece responder también a lógicas de campaña. Pero sí exige claridad: las relaciones entre Estados no pueden quedar sometidas a consignas electorales ni a amenazas que evocan escenarios superados por el derecho internacional y la diplomacia moderna.

El Tratado de Ancón de 1883 y el Tratado de Lima de 1929 forman parte del marco histórico y jurídico que definió la situación territorial entre ambos países tras la Guerra del Pacífico. Plantear su revisión desde una lógica de confrontación no solo desconoce décadas de institucionalidad diplomática, sino que puede abrir heridas innecesarias en sociedades que, pese a sus diferencias, comparten desafíos comunes en frontera, seguridad, comercio, migración y desarrollo.

La controversia también deja una advertencia para la política chilena: el norte del país requiere una mirada

estratégica permanente. Tarapacá y Arica son regiones clave para la soberanía, la integración y la proyección internacional de Chile hacia el Pacífico y el mundo andino. Fortalecer su desarrollo, su seguridad, su infraestructura y su presencia estatal es también una forma concreta de afirmar soberanía, más allá de cualquier declaración externa.

En ese sentido, el debate no debiera quedar reducido a la reacción frente a una frase. La verdadera discusión es cómo Chile fortalece sus territorios fronterizos, cómo sostiene una política exterior seria y cómo evita que discursos extremos, de cualquier lado de la frontera, dañen vínculos que son fundamentales para la estabilidad regional.

Las palabras de Antauro Humala llegan en un momento especialmente sensible para Perú y generan preocupación legítima en Chile. Su alcance dependerá, en buena medida, de la respuesta que entregue Roberto Sánchez, del curso final del proceso electoral peruano y de la capacidad de ambos países para mantener la controversia dentro de los márgenes diplomáticos.

Por ahora, la señal es clara: el nacionalismo territorial volvió a irrumpir en la campaña peruana y lo hizo apuntando directamente al norte chileno. Frente a ello, la prudencia no debe confundirse con debilidad, ni la firmeza con estridencia. Chile tiene tratados, historia institucional y soberanía plenamente ejercida sobre Arica y Tarapacá. Lo que corresponde es defender esa posición con seriedad de Estado, sin caer en el juego de una retórica que, en tiempos electorales, puede buscar más impacto que responsabilidad.

Crónica

Tensión electoral en Perú: dichos de Antauro Humala sobre Tarapacá y Arica abren flanco diplomático con Chile

El líder etnocacerista confirmó su apoyo a Roberto Sánchez y planteó revisar los tratados limítrofes con Chile, incluso hablando de una eventual reivindicación "por la vía diplomática o armada", declaraciones que elevan el tono nacionalista en plena definición presidencial peruana.